

Movimientos y Activismos Estudiantiles

N1

Septiembre
2026

Centroamérica estudiantil:
movimientos estudiantiles
universitarios del siglo XXI en
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Honduras

Participan en este número: Randall Chaves Zamora,
Andrés Gutiérrez, Adriana del Carmen Ramírez Martínez,
Daniela Lizbeeth Núñez Oyuela, Marianela Vásquez Cornejo,
Fátima Villalta

Boletín del Grupo de Trabajo:

Movimientos y activismos estudiantiles



Movimientos y activismos estudiantiles no 1 : centroamérica estudiantil : movimientos estudiantiles universitarios del siglo XXI en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras / Randall Chaves Zamora ... [et al.]. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2026.

Libro digital, PDF – (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-308-364-0

1. América Central. 2. Universidades. 3. Movimiento Estudiantil. I. Chaves Zamora, Randall
CDD 301



Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección – Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Pablo Vommaro – Director Ejecutivo

Gloria Amézquita – Directora Académica

María Fernanda Pampín – Directora de Publicaciones

Gustavo Lema – Director Comunicación e Información

Equipo Editorial

Lucas Sablich – Coordinador Editorial

Solange Victory – Producción Editorial

Valeria Carrizo y Darío García – Biblioteca Virtual

Equipo de Investigación y Grupos de Trabajo

Magdalena Rauch – Coordinadora

Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Luna González y Teresa Arteaga

Equipo Comunicación e Información

Noelia Croci – Coordinadora Redes Sociales

Renata Maestrovicente – Diseñadora Gráfica

Coordinadorxs del Grupo de Trabajo

Natalia Agudelo Castañeda

Universidad Industrial de Santander (UIS)

nataagudelo@utp.edu.co

Nicolás Dip

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

nicolas.dip@cide.edu

Coordinadores/as del número

Randall Chaves Zamora

Universidad Libre de Berlin (FU)/Universidad de Costa Rica (UCR)

randall.chaveszamora@fu-berlin.de

Andrés Gutiérrez

El Colegio de México (COLMEX), andres.gutierrez@colmex.mx

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB

Ciudad de Buenos Aires | Argentina.

Tel [54 11] 4304 9145

Fax [54 11] 4305 0875

clacso@clacsoinst.edu.ar | <www.clacso.org>

Contenido

Presentación al Boletín #1

Natalia Agudelo Castañeda y Nicolás Dip 2

Introducción. Centroamérica a través de sus estudiantes (2026–2016)

Randall Chaves Zamora 4

La universidad capturada: crisis y activismos en la Universidad de San Carlos de Guatemala

Andrés Gutiérrez 6

La Universidad como territorio de disputa, de memoria y lenguaje frente al ascenso de Nayib Bukele en El Salvador

Adriana del Carmen Ramírez Martínez 13

Un nuevo país nos espera: movilizaciones y organización estudiantil durante las protestas de Nicaragua en 2018

Fátima Villalta 19

Una memoria sobre una toma: el movimiento estudiantil en Costa Rica (2018-2019)

Marianela Vásquez Cornejo 23

Militancia, aula, calle: reflexiones sobre la militancia universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 2016-2019

Daniela Lizbeeth Nuñez Oyuela 29

Presentación al Boletín #1

Natalia Agudelo Castañeda*
Nicolás Alberto Dip*
Coordinadores GT

Este primer boletín forma parte de las reflexiones y debates impulsados por el Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Movimientos y Activismos Estudiantiles, el cual acaba de iniciar sus labores en 2026. Desde sus distintas actividades y publicaciones, el GT se propone consolidar un espacio de reflexión crítica e interdisciplinaria para el abordaje de los activismos estudiantiles en los siglos XX y XXI.

El punto de partida del GT consiste en generar encuentros y publicaciones que permitan afianzar cinco líneas de análisis para sistematizar las protestas y demandas más relevantes de los movimientos y activismos estudiantiles latinoamericanos y caribeños:

1. Cuestionar el predominio de hitos clave

La primera cuestión que alerta el campo de estudio sobre los movimientos y activismos estudiantiles es la necesidad de no sólo centrarse en 1918 y 1968. La excesiva atención a esas fechas emblemáticas ha limitado el estudio de protestas estudiantiles vinculadas al siglo XXI. A su vez, opacó la pregunta por cuáles son las resignificaciones que hacen las experiencias estudiantiles contemporáneas de esas etapas precedentes.

2. Reconocer la heterogeneidad social existente al interior de los activismos

Es central impulsar debates que consideren los discursos y acciones del activismo estudiantil dentro de las interacciones sociales, conflictos y querellas en que están inmersos. Así puede indagarse su participación en diferentes niveles educativos (no sólo universitarios) y en espacios geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales diversos, donde se relacionan con una red amplia de actores.

3. Proyectar la cuestión educativa en un sentido amplio

Las controversias sobre los proyectos educativos en que participan los movimientos y activismos estudiantiles son otra dimensión significativa para profundizar la agenda de investigación y debate. Es necesario considerar que las disputas políticas y sociales más amplias que protagonizan esas militancias suelen estar en conexión con querellas vinculadas al ámbito educativo o al carácter específicamente estudiantil.

4. Escapar al reduccionismo geográfico

Los análisis de los movimientos y activismos estudiantiles por lo general presentan un sesgo al tener sólo como referencia a las ciudades capitales de cada país. Frente a esto, se necesita considerar una imagen y una cartografía amplia e integral de la protesta estudiantil en América Latina y el Caribe.

* Licenciada en Comunicación e Informática Educativa y Magister en Historia en la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente, se encuentra en la fase final del Doctorado en Historia en la Universidad Industrial de Santander, Colombia.

* Profesor Investigador de Tiempo Completo en la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Además, es profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

5. Reconocer la diversidad de identidades políticas

Un abordaje en profundidad debe considerar que el espectro de tendencias políticas de los movimientos y activismos estudiantiles puede contemplar fuerzas con distintas orientaciones ideológicas, como izquierdas, derechas y otras vertientes que escapan a las dicotomías clásicas.

Estas cinco líneas no agotan el debate, más bien son ejes que articulan y dinamizan la conversación con el fin de aportar herramientas para una comprensión más compleja, situada y plural de los movimientos y activismos estudiantiles de nuestra región. Por esa razón, el primer boletín del GT coordinado por Randall Chaves Zamora y Andrés Gutiérrez retoma todas esas discusiones y se titula “Centroamérica estudiantil: movimientos estudiantiles universitarios del siglo XXI en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras”.

Invitamos a quienes puedan leerlo a sumarse a la reflexión crítica y a contribuir con sus propias miradas y experiencias dentro del GT.

Grupo de Trabajo CLACSO
Movimientos y Activismos Estudiantiles

Introducción.

Centroamérica a través de sus movimientos estudiantiles (2026–2016)

Randall Chaves Zamora*

En octubre del 2019, yo era un docente novato cuando tomaron por primera vez la Facultad de Ciencias Sociales, donde, también por primera vez, yo tenía un trabajo. Recuerdo haber pasado de la angustia a la alegría y de la esperanza al escepticismo, pero recuerdo, también, que nunca dejó de sorprenderme la acción del movimiento estudiantil. Como un interesado en el tema, era la primera vez que una acción de estas irrumpía en mi cotidianidad y se convertía en el único tema de conversación de mi entorno. Como obsesionado con los estudios sobre la juventud y los movimientos estudiantiles, la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica me había dado el tremendo privilegio de ofrecer una clase sobre la historia de la juventud, que, sin planearlo, se convirtió en un taller juvenil.

El objetivo de este número persigue el mismo objetivo que aquella toma generó en mí: busca sorprender a sus lectoras y lectores sobre el tremendo peso de la acción estudiantil centroamericana. Para quienes ya fueron sorprendidos por ella o para quienes no necesitan convencerse de la importancia de este actor político, el número será una suerte de fotografía panorámica para entender o recordar la trayectoria de los activismos universitarios de los últimos años en Centroamérica. Cada persona que lea las páginas siguientes, también asistirá a emociones que transitan del escepticismo a la esperanza, y de la furia a la alegría. La resistencia, sin embargo, es la constante.

Acá se asiste a la historia reciente de jóvenes que resisten contra el neoliberalismo, el capitalismo de rapiña, el patriarcado y las élites políticas y universitarias que corrompen los principios de la educación superior pública centroamericana. Los siguientes textos retratan a jóvenes cuyas identidades se forman en una región sumida, por completo, en autoritarismos que identifican la educación como una amenaza y buscan convertirla en un arma.

Cuando Andrés y yo nos propusimos la coordinación de este primer número del Grupo de Trabajo Movimientos y Activismos Estudiantiles, asumimos, arbitrariamente, el concepto más limitado de Centroamérica, para explicar la realidad contemporánea de los movimientos estudiantiles en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sabemos que falta, acá, evaluar las experiencias de Belice y Panamá, pero consideramos que esta “muestra regional”, nos permite hacer eco de la preocupación de este GT, sobre el ya tradicional abandono de lo centroamericano y caribeño en el ámbito de los estudios latinoamericanos.

* Candidato al Doctorado en Historia por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín. Becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha sido docente e investigador en la UCR y sus líneas de investigación son la historia de la juventud y del movimiento estudiantil, la historia intelectual y la Guerra Fría cultural. Contacto: randall.chaveszamora@fu-berlin.de

Buscamos alterar ese abandono con cinco textos organizados en una cronología inversa de la última década (2026–2016): este número inicia con tres ensayos de procesos en curso, como lo son los casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Más adelante, seguimos nuestra retrospectiva desde el presente hacia el pasado, para visitar las inusuales tomas (ocupaciones) estudiantiles de edificios universitarios en la Costa Rica del 2019 y terminamos con una vivaz experiencia personal sobre el movimiento estudiantil hondureño del año 2016.

Al no incorporar textos tradicionalmente académicos, sino ofrecer espacio a las memorias, las reflexiones personales, la crónica y el ensayo, también buscamos tomar una postura. Todos los textos que presentamos son híbridos y hablan, en gran medida, de experiencias vividas. Nuestro propósito con este número fue abrir espacio a otras formas de producción de conocimiento e introducir acá ejercicios de redacción no tradicionales en el mundo académico. Consideramos, así, que estos textos son tan válidos para comprender el contexto estudiantil universitario como los estudios tradicionales. En ese sentido, este número pretende aportar a la comprensión del presente y ser un insumo para los estudios sobre el movimiento estudiantil del porvenir.

Temporalmente, hemos asumido una perspectiva de historia inmediata, y no lo hacemos de manera accidental, ni nos movemos por un sesgo presentista. Al contrario, al explorar la última década del siglo XXI, buscamos romper la idea constantemente repetida de que los movimientos estudiantiles se mueven poco. Este número muestra que su movimiento es constante y que no es lineal. Lejos de aquella idea más bien nostálgica y elogiosa sobre la acción estudiantil de la segunda mitad del siglo XX, los textos que componen este número demuestran que la acción estudiantil ha experimentado uno de los momentos de represión autoritaria más crudos de las últimas décadas.

¿Qué pueden hacer y qué hacen los movimientos estudiantiles en el presente? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración política y a qué resisten? Los siguientes textos responden a estas y otras preguntas.

Con este número, Andrés y yo, junto a las colegas que lo componen, nos hemos preocupado por reunir cinco voces: activistas, estudiantes, académicas, investigadoras especializadas en diferentes áreas de las Ciencias Sociales, que ya sea en el exilio, o en sus países, recuerdan e imaginan un repertorio de acciones estudiantiles y evalúan las estrategias del presente, del pasado y del porvenir. Además de mostrar una Centroamérica estudiantil, este es el objetivo que persiguen las siguientes páginas.

La universidad capturada: crisis y activismos en la Universidad de San Carlos de Guatemala

Andrés Gutiérrez*

La presente contribución tiene por objetivo plantear tres breves reflexiones sobre la universidad pública y los activismos estudiantiles en Guatemala. Aunque se trata de contribuciones independientes, dialogan entre sí a partir de un hilo común: la preocupación por el pasado, el presente y el futuro de la Universidad de San Carlos en un contexto de erosión democrática y cooptación institucional. Cada una está planteada desde una orientación que no aspira a ser académica ni exhaustiva. Sin embargo, invita a quienes las lean a profundizar en lo que sucede en el país, a comprender por qué es importante prestar atención a la Universidad de San Carlos (USAC) y a apoyar a sus estudiantes y profesorado en resistencia.

La Universidad de San Carlos y su politización prescrita

La educación superior atraviesa un momento particularmente convulso en toda la región. El retorno de gobiernos con tendencias autoritarias, el auge de lo que el historiador Steven Forti ha denominado Derechas 2.0, y la puesta en marcha de procesos de erosión democrática han configurado nuevas presiones y dimensiones en la ya compleja relación entre universidades, mercado y Estado. Además de las conocidas estrategias empleadas en contra de las instituciones de educación superior, como el estrangulamiento financiero, las universidades centroamericanas han sido escenarios en los que ataques directos a sus integrantes, ya sea por la vía judicial o violenta, han provocado el encarcelamiento injustificado de algunas personas y el exilio de muchas otras. El objetivo suele ser el mismo: neutralizar la crítica y la oposición política organizada.

En este contexto, escribir sobre la educación superior pública guatemalteca y el activismo estudiantil no resulta una tarea sencilla. La única universidad pública, la Universidad de San Carlos, ha sido dirigida desde 2022 por Walter Mazariegos Biolis, quien se ha impuesto en la rectoría dos veces consecutivas a partir de la exclusión de un amplio sector del electorado de oposición, la modificación progresiva de los reglamentos internos de la universidad a su favor, el cierre intermitente del campus central y una política que premia a sus aliados y castiga severamente la crítica. Así, lujosas celebraciones, viajes y banquetes innecesarios, entrega de reconocimientos y el aparente mejoramiento de las condiciones laborales de la administración y el profesorado

* Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Movimientos y activismos estudiantiles. Candidato a Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México e investigador doctoral del Colegio Internacional de Graduados, integrado por la Universidad Libre de Berlín, la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad de Potsdam. Es miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Investigadores e Investigadoras Doctorales (IDOC), iniciativa de El Colegio de México, la Pontificia Universidad Católica del Perú, FLACSO Ecuador y la Universidad de Santiago de Chile. Contacto: andres.gutierrez@colmex.mx

contrastan con el despido injustificado de amplios sectores del personal, la cancelación de matrículas y la eliminación de registros académicos de estudiantes. A esto se suma una estrategia de vigilancia e intimidación en la que el costo de la organización se vuelve cada vez más alto.

Para un observador o una observadora externa, parecería, además, extraña la forma en la que diversas instancias y órganos del Estado se han alineado y legitiman esta orientación autoritaria al interior de la universidad, incluyendo juzgados y cortes, que suelen fallar a favor de la criminalización de sectores de oposición. Las dudas se disipan rápidamente para quienes conocen la relevancia que tiene la universidad en la política nacional.

A partir de la Constitución Política de 1985 y de reformas posteriores, la USAC se constituyó en un canal de incidencia formal y decisiva en la arquitectura de los tres poderes del Estado. Entre sus capacidades técnicas y políticas, la universidad puede formular leyes; nombrar directamente a dos magistrados para el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad; tener asientos en las juntas directivas de entidades descentralizadas y autónomas como la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Instituto Nacional de Estadística; y, especialmente importante para entender el momento actual, decidir quién integra las nóminas de candidatos para la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelación, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas, entre otras funciones.

El interés en involucrar activamente a la Universidad de San Carlos en la política nacional durante la transición a la democracia respondió, al menos en el discurso, a la convicción de que la academia podía operar como un contrapeso frente a la captura militar del Estado. Sin embargo, al margen de la buena fe detrás de ese diseño, sus efectos a largo plazo han mostrado ser perjudiciales para una institución que, históricamente, había volcado sus esfuerzos hacia la docencia, la extensión y, en menor medida, la investigación. En ese sentido, vale la pena pensar la cooptación actual de la USAC como un caso concreto de erosión democrática. Esto no quiere decir que la universidad no se haya configurado históricamente como un sector político activo en distintas coyunturas de la historia reciente. Todo lo contrario.

Por poner dos ejemplos del siglo XX, el papel de las autoridades y de los grupos profesionales y estudiantiles anticomunistas durante la década del cincuenta fue fundamental para el gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas y el derrocamiento de Juan Jacobo Árbenz. Esto le valió a la USAC la exclusividad como única institución de educación superior pública del país en la Constitución Política de 1956. Por otro lado, la aparición y el predominio de sectores progresistas y de izquierda marcaron la vida universitaria desde finales de la década del sesenta y durante la del setenta. La posición crítica y comprometida con lo social asumida por autoridades, profesionales y sectores estudiantiles organizados, aunque no libre de contradicciones y disputas internas, sigue siendo ejemplo del valor de la democracia, la acción política organizada y la posibilidad de pensar en un país distinto.

El particular encono que distintos gobiernos mantuvieron con la Universidad de San Carlos, así como la escalada represiva que sufrieron sus miembros durante estas décadas, evidencian su relevancia política en Guatemala. Sin embargo, la Constitución Política de 1985, con las reformas y atribuciones asignadas a la universidad, marca un antes y un después para la fisonomía de la institución y el sentido en el que es, además de una institución educativa, social o científica, también política. ¿En qué medida? En tanto que antes de la Constitución Política de 1985, la politización de distintos sectores universitarios, incluyendo estudiantes, profesionales o sus autoridades, posicionaba a esta pluralidad de actores como sectores externos al Estado. Se buscaba, pues, presionar e influir en órganos específicos, en las políticas públicas o en la política en sentido amplio, a través de movilizaciones organizadas, pronunciamientos o denuncias, sin la capacidad directa para tomar las decisiones concretas en las instancias correspondientes.

Al interior de la universidad, como en toda institución de educación superior, el ejercicio de la representación política, la organización sindical o la activación política estudiantil solían girar en torno a disputas y reclamos por temas educativos, la distribución de los recursos financieros, la

captación de matrícula, el mejoramiento de la infraestructura, el aumento y la monopolización de las reputaciones o el valor y la relevancia de determinados métodos, teorías y enfoques, entre otras cuestiones. Incluso en un contexto de clientelismo, pago de favores o prebendas vinculados con la asignación de horas y con la mejora de las condiciones de trabajo, un aspecto particularmente relevante en la Universidad de San Carlos, estos elementos se configuraban al interior de la institución, sin consecuencias directas que trascendieran a las personas involucradas y a la propia universidad.

El caso es que, a este aspecto de la política universitaria, o su politización en sentido llano (que sigue existiendo al interior de la institución), se le ha superpuesto una politización de características distintas y que ha cambiado la fisonomía de la institución en instancias concretas, pero con mucha influencia en el funcionamiento de la universidad en su conjunto. En otro lugar he denominado a esta forma de politización, *politización prescrita*. Es decir, una politización reglamentada, sancionada en ley y que vincula de manera directa dos ecologías: la del Estado y la de la universidad. Estas antes habían interactuado con cierta autonomía relativa. Sin embargo, la Constitución Política de 1985 integró a la universidad al andamiaje del Estado de tal forma que alteró las características de los vínculos entre los actores involucrados, los recursos en disputa y los intereses alrededor de dichos recursos.

Al reglamentar de esta manera el rol político de la institución, la Constitución Política convirtió al Consejo Superior Universitario y a facultades como las de Ciencias Económicas y, sobre todo, Ciencias Jurídicas y Sociales en espacios bisagra. En estos, las disputas y decisiones dejan de tener un alcance estrictamente educativo o institucional y producen beneficios, configuran intereses y tienen repercusiones en instancias en las que antes la universidad no tenía incidencia. Lo opuesto también es válido, pues la universidad se constituyó en un espacio fundamental por ocupar para construir cierto tipo de relaciones y alianzas e influir en las decisiones y ampliar las posibilidades de imponer cierto tipo de políticas o monopolizar cierto tipo de recursos.

En esa medida, no resulta extraño que el propio Mazariegos y aliados en el Consejo Superior Universitario hayan modificado los reglamentos internos de la universidad para prolongar las funciones de los y las representantes afines que mantenían su posición pese a tener los plazos vencidos; o que él mismo, junto a su círculo cercano, esté creando nuevas universidades privadas con facultades de Ciencias Económicas o Ciencias Jurídicas y Sociales; o que las y los operadores de justicia fallen a favor de la universidad en casos de criminalización del profesorado y del estudiantado. En última instancia, los tres fenómenos responden a la misma lógica: quien controla estos espacios bisagra hoy tiene la capacidad y el interés para asegurar que su control siga en manos afines mañana, ya sea prolongando representantes vencidos al interior de la universidad, sumando votos afines desde instituciones creadas ad hoc, o cultivando lealtades entre aquellos que decidirán en el futuro si esa misma administración continúa en el poder.

De ahí que, a diferencia de otros casos de universidades en Centroamérica, en la USAC las presiones autoritarias no la condicionan desde el exterior. Han sido los procesos iniciados por la politización prescrita y la paulatina configuración de estos espacios bisagra como instancias cuyo control se busca monopolizar los que han derivado en su captura desde adentro. Estos espacios vinculan a la universidad con intereses, recursos y disputas que no son estrictamente educativos.

No por ello la situación es menos acuciante. Con el objetivo de mantenerse en la rectoría, Mazariegos y la red que se ha tejido a su alrededor han implementado una clara estrategia de vigilancia, intimidación, criminalización y violencia contra profesores, profesoras y estudiantes. La forma en que combinan una política de premios con castigos selectivos, así como el hecho de que la cooperación se ejerza desde adentro, no deben impedir que se cuestionen y repudien los vejámenes que se están cometiendo.

La USAC necesita nuestra atención. Sus profesionales y, sobre todo, sus estudiantes, nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos de crisis institucional y erosión generalizada de la democracia en la región.

Tensiones en la organización política al interior de la universidad

Durante los meses de junio y julio de 2024 tuve la oportunidad de visitar la Universidad de San Carlos para realizar trabajo de campo para una tesis sobre las condiciones del trabajo académico en Guatemala. Esta era una oportunidad importante, ya que el campus central recién abría sus puertas luego de aproximadamente cuatro años cerrado, primero por el contexto de la pandemia y, posteriormente, por una toma del campus por parte de las y los estudiantes.

Esta última se dio durante el mes de abril de 2022. El acto constituyó una expresión de protesta ante la elección fraudulenta de Walter Mazariegos Biolís, quien, haciendo uso de la fuerza, negó la entrada a 85 electores de oposición pertenecientes a 17 de los 34 cuerpos electorales que tenían como objetivo elegir la rectoría. Mazariegos se impuso en medio de señalamientos y a pesar de la existencia de recursos legales interpuestos por diversos sectores.

La toma del campus central duró hasta junio del año siguiente. Sin embargo, la administración retardó su reapertura hasta enero de 2024, con la justificación de que las reparaciones y readecuaciones requerirían un trabajo prolongado. Asimismo, señaló que, como parte de la toma estudiantil, tanto la infraestructura como diversas cámaras, computadoras y servidores habían sido dañados o robados. Esta excusa le serviría para justificar la supuesta falta de expedientes de estudiantes de oposición dos años después, en 2026, lo que no explica cómo estos fueron capaces de realizar diversos trámites administrativos durante los meses anteriores.

Sin embargo, esta reapertura se mantuvo hasta marzo de 2026, pues en muchas unidades académicas se mantuvo la modalidad remota. Con motivo de un nuevo proceso electoral, el Consejo Superior Universitario decidió regresar a la virtualidad con la justificación de ocupar el campus para realizar nuevos trabajos de construcción y mantenimiento que requerían excavaciones preliminares del Ministerio de Cultura y Deportes, el cual inmediatamente desmintió que estuvieran realizándose las labores que justificaban el cierre. En este contexto, Mazariegos volvió a asumir la rectoría por un segundo mandato, adoptando una estrategia que, entre otras medidas, involucró la modificación progresiva de los reglamentos internos de la universidad, así como la exclusión, ahora por la vía jurídica, de los distintos cuerpos electorales de oposición.

Quienes tenemos algún contacto con personas dentro de la universidad conocemos, a través de sus relatos, el miedo, la reserva y la zozobra con que muchas realizan sus labores o estudios. Despidos o cancelación de matrículas de manera injustificada, acoso laboral o académico, retraso de procesos administrativos, vigilancia constante, presiones políticas, reducción de derechos laborales y la presencia de grupos de choque resguardando el campus conviven con una estrategia que premia a quienes respaldan a la rectoría y que promueve reformas o procesos que, en apariencia, benefician a estudiantes y trabajadores de la universidad.

En el caso de algunos profesores y profesoras que podrían mostrarse adversos al rector, el temor a ver reducida su jornada de trabajo o a ser despedidos constituye una de las principales formas de sujeción. Esto juega a favor de una administración que, como otras que le antecedieron, echa mano de la precariedad laboral y de una política de contratación que históricamente ha basado el tiempo de trabajo en horas asignadas a cursos o labores concretas. De este modo, el personal se ve obligado a acumular de manera fragmentaria horas para alcanzar jornadas de tiempo parcial o de tiempo completo. A ello se suma una estrategia de vigilancia a través de las plataformas virtuales en donde se llevan a cabo los cursos. En ellas existe un monitoreo constante que propicia la autocensura y forma parte de una estrategia en la que tanto la libertad de expresión como la de cátedra pretenden ser castigadas.

En el caso estudiantil, la implementación de la modalidad virtual, que mantiene fragmentada la organización, sumada al acoso constante por parte de otros profesores y profesoras afines a la administración central, así como a la eliminación de registros académicos o la cancelación de

matrículas, juega un papel importante como estrategia que individualiza la sanción y eleva el costo de la participación organizada. Al mismo tiempo, al ser medidas implementadas sobre estudiantes particulares, ocultan la represión selectiva de una administración que se proyecta en diversas plataformas como eficiente y preocupada por la integridad de sus estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, influye también el hecho de que distintas cortes, así como el Ministerio Público o la Corte de Constitucionalidad, operan en respaldo de la universidad, directamente o por omisión. El efecto más evidente es la percepción de que la vía judicial para canalizar el descontento está bloqueada y, por lo tanto, el costo de la movilización podría ser muy alto.

Fue la visita de 2024 la que me hizo entender la forma específica en que estas cosas operaban al interior de la USAC, sobre todo el control y el recelo con que se desarrolla la gestión institucional. Precisamente, una de las primeras personas con las que dialogué se encontraba en una disputa en contra de la universidad derivada de un despido injustificado. Al consultar sobre algunos temas relacionados con las políticas de contratación de la USAC, me refirió a personas que tenían amplios conocimientos sobre el particular. Sin embargo, me advirtió que no me darían información por temor a represalias de la administración central.

Como parte de una estrategia para evitar esta clase de inconvenientes durante mi visita, y como un ejemplo claro de la atmósfera institucional en la que sabía que me habría de introducir, decidí que lo oportuno era evitar aclarar que era de Guatemala, mucho menos mencionar haber estudiado en la USAC.

Una de mis primeras visitas fue al Departamento de Registro y Estadística. Ahí presenté mis credenciales y solicité información sobre una encuesta sociodemográfica que se realiza año con año a todas y todos los estudiantes de la universidad. Uno de los trabajadores del departamento me comentó que durante la toma se había perdido toda esa información, salvo las de 2015 y 2023. El inconveniente, según me señaló, era que la información de estas encuestas no se sistematizaba y les era imposible proporcionarla sin antes limpiar la base de datos. No obstante, anotó mi contacto con el compromiso de enviar el instrumento de encuesta, que recibí durante la tarde del mismo día.

Al cabo de algunos días, decidí escribir a la recepcionista para conocer el avance de mi solicitud. Inmediatamente, recibí una comunicación de la secretaria del jefe del departamento, cuestionando de manera tajante cómo y a través de quién obtuve la información sobre el daño en los servidores, así como el instrumento de encuesta. Sin entender de qué se trataba, señalé que me habían sido proporcionados por una persona miembro del departamento. Luego de la aclaración, no volví a recibir ninguna comunicación por parte de ella o de alguna persona de Registro y Estadística.

En esos mismos días me asomé por otro departamento, solicitando información sobre las modalidades de promoción académica en la universidad. Antes de proceder con cualquier solicitud, la encargada del departamento me cuestionó: «¿Ya sabe de esto el rector?». Solicitó que fuera directamente a rectoría a informar de mi presencia en la universidad antes de realizar cualquier otra gestión. Con esto, entendí y viví en carne propia la lógica de vigilancia, la centralización del poder y el clima de delación que se vivía al interior de la universidad.

Entre quejas por nombramientos discrecionales, contrataciones anómalas y despidos injustificados, también encontré mucha indiferencia e, incluso, complacencia con la administración. En una unidad académica en la que se ha limitado la posibilidad de elegir a la dirección y el rector ha impuesto a una persona afín, algunos profesores me señalaron que estaban satisfechos con la gestión. “Ha hecho más que los anteriores”, “es un buen administrador”, “aceleró los pagos y deudas pendientes de la universidad”. Estos casos sugieren la dificultad que plantea pensar la capacidad del profesorado para organizarse y apoyar a las y los estudiantes que deciden activarse políticamente. Vistas de manera aislada, estas personas, ya sea por temor o convencimiento, perciben como marginal la represión a la que están sujetos sus colegas.

Sin embargo, de ninguna manera se ha reducido la activación política de diversos sectores de la USAC. Las y los estudiantes afectados por las medidas violentas y discrecionales de la administración, así como quienes se oponen frontalmente a la administración de Walter Mazariegos, mantienen una postura férrea y digna frente a los vejámenes de la administración central. Pese a la adversidad, siguen planteando recursos en las instancias correspondientes y mantienen viva la discusión en redes sociales y plataformas de comunicación. De manera discreta, también se ha tejido una red de apoyo entre sectores importantes del profesorado y estudiantes críticos con la administración. Conscientes de los riesgos que el sector estudiantil asume al ser uno de los actores más afectados, apoyan reconociendo el valor de su labor política.

También en las aulas, en los diversos cursos y materias, se muestran solidarios y comprensivos con los costos emocionales y académicos que conlleva pronunciarse activamente contra la rectoría, así como con las consecuencias que ello puede tener en los procesos formativos e, incluso, en los proyectos de vida de las y los estudiantes. Se trata de un sector del profesorado que, pese a todo, mantiene vivo el espíritu crítico y el compromiso con la docencia, la investigación y la extensión.

Lo hecho y lo posible en los estudios sobre el activismo estudiantil en Guatemala

Las reflexiones previas abordan, desde distintos ángulos, los procesos de cambio institucional y el miedo, la vigilancia y el control que hoy atraviesan distintas personas en la USAC. Sin embargo, ese mismo escenario, que forma parte de más de un siglo de disputas entre estudiantes y autoridades, es el que me interesa rescatar aquí, aunque desde otra perspectiva. No tanto respecto a lo que ocurre dentro o fuera de la universidad, sino respecto a cómo se ha estudiado. La respuesta, adelanto, sin ánimo de ser polémico, es que el estudio del activismo estudiantil es escaso y fragmentario.

En ese sentido, lo que sigue es un recorrido esquemático por ese campo académico todavía pequeño, eminentemente historiográfico y ordenado no por autores o corrientes teóricas, como suele hacerse en una revisión de literatura, sino como una línea de tiempo que describa qué se ha estudiado, qué se estudia ahora y qué queda pendiente. Me parece oportuno aclarar que escribo estas líneas desde un interés teórico y desde mi posición como sociólogo de un país en el que esta disciplina languidece en múltiples sentidos.

Pasado: el Movimiento Estudiantil

Casi todo lo que sabemos sobre el activismo estudiantil guatemalteco proviene de la reconstrucción del Conflicto Armado Interno (1960–1996) y de sus antecedentes revolucionarios (1944–1954). Es una literatura, en muchos aspectos, sólida. Vale la pena mencionar los dos volúmenes de Virgilio Álvarez Aragón, la referencia más exhaustiva sobre el tema; la biografía que Ricardo Sáenz de Tejada dedicó al dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, asesinado en 1978; o el trabajo de Heather Vrana sobre las clases medias y su relación con lo que la autora denomina nacionalismo estudiantil, entre muchos otros.

Sin embargo, buena parte de los abordajes comparten una misma tendencia: analizan al estudiantado como un sector ya movilizado en las calles y organizado como reacción a una u otra coyuntura política nacional. Pocas veces se preguntan cómo se organizaron antes de salir a protestar o cómo la propia universidad (sus reformas curriculares, el crecimiento de la matrícula, la influencia de las carreras o disciplinas de elección) moldeó esa politización desde dentro. De una u otra forma, la institución pierde su idiosincrasia y es el clima político nacional, sus tiempos y lógicas, lo que dicta el sentido y la dirección de la universidad. Un ejemplo evidente de esta tendencia lo encontramos en la historia institucional de Augusto Cazali Ávila, quien organiza el siglo XX según los períodos presidenciales del país y su empalme con las diversas rectorías.

Presente: la generación de 2015

El estudio de las y los estudiantes adoptó un matiz diferente a partir de los ciclos de protesta que, desde 2015, acompañaron los casos de corrupción contra el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. El cambio también fue empírico: estudiantes de universidades públicas y privadas se organizaron al margen y, a veces, en contra de sus propias autoridades. Resaltó también el protagonismo de mujeres, lo que hace obligada la mención a Lenina García como la primera secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) en la historia de esta organización.

Algunos trabajos sobre este período se aproximan más a la sociología de los movimientos sociales y ponen en el centro la experiencia de sus propios protagonistas. Entre los abordajes destacan el proceso de recuperación de la AEU tras casi dos décadas de cooptación criminal, la forma en que se tejieron redes entre organizaciones interuniversitarias y las trayectorias mediante las cuales algunos activistas de 2015 desembocaron, años después, en proyectos como el Movimiento Semilla. Es una mirada más rica, pero todavía dispersa, compuesta por trabajos que describen casos aislados sin dialogar demasiado entre sí ni con estudios similares de otros países, y que arrastran sesgos conocidos en la región, como el peso desproporcionado de las capitales en comparación con el interior del país o la costumbre de mirar solo a los liderazgos más visibles, como si representaran a todo el estudiantado movilizado.

Futuro: una mirada pendiente

Considero necesario superar, entre otras cuestiones, la visión del activismo o movimiento estudiantil que lo ancla a hitos (1920, 1944, 1962, la década de 1970 o 2015) y lo reivindica únicamente por su rol político o por el alcance de sus resultados. Más bien, valdría la pena entender el activismo universitario como una expresión, entre muchas otras, de una política estudiantil más amplia, que también se ejerce en aulas, pasillos y órganos de representación, no solo en la plaza pública.

Eso implica tratar a las universidades como arenas de disputa con autonomía relativa y no como simples escenografías de la política nacional. Trasladar esta inquietud hacia un interés sociológico supone preguntarse, entre muchas otras cuestiones, cómo se construyen los marcos de sentido que motivan la movilización o qué papel juegan las redes previas, de amistad, de facultad o de familia, en la activación o la desafección política.

También supone no perder de vista que sostener esa movilización en el tiempo exige recursos materiales, simbólicos y humanos. Implica, además, comparar repertorios de protesta a través del tiempo, desde las huelgas y tomas de edificios en los setenta hasta los performances y las redes sociales después de 2015. Asimismo, permite seguir las trayectorias biográficas de activistas de distintas generaciones para entender cómo el activismo transforma (o no) sus vidas.

Centroamérica atraviesa hoy procesos de erosión democrática y cooptación institucional de los que la propia USAC, como muestran las reflexiones previas, representa un ejemplo importante. Documentar cómo se activa, se sostiene o se desactiva la acción colectiva en ese contexto no es solo una tarea académica pendiente. También es una forma de intervenir desde la investigación.

La Universidad como territorio de disputa, de memoria y lenguaje frente al ascenso de Nayib Bukele en El Salvador

Adriana del Carmen Ramírez Martínez*

El movimiento estudiantil en El Salvador ha sido históricamente un sujeto político de la movilización y la memoria histórica: desde su participación en la movilización social en el contexto de la guerra civil de El Salvador y la masacre de estudiantes en 1975, hasta la memoria de los mártires jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Estas resistencias y memorias han formado la identidad y símbolos que, en los últimos años, han sido apropiados por figuras políticas como Nayib Bukele, quienes los han capitalizado para su llegada a la presidencia.

En medio del contexto político de El Salvador nos faltan respuestas, pero también es necesario plantearnos las preguntas adecuadas para recuperar la lucha en la batalla de las ideas y en la construcción de poder popular. Una de las preguntas que, como movimientos estudiantiles, debemos plantearnos es: ¿qué sucede con los movimientos cuando un proyecto político que llegó al poder apelando a las juventudes transforma las condiciones en las que estos se organizan? Asimismo, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta transformación de condiciones?

Un gobierno que llega al poder reivindicando discursivamente a las juventudes puede presentarse como aliado y líder mientras los espacios de movilización juvenil pierden capacidad de acción. El ascenso al poder de Nayib Bukele estuvo acompañado de una estrategia de apropiación del lenguaje, los símbolos y la memoria política de las juventudes y del movimiento universitario. Sin embargo, una vez en el poder, las condiciones materiales y políticas para la organización estudiantil se transformaron, produciendo una tensión entre la juventud como sujeto político movilizad y la juventud como categoría discursiva utilizada para legitimar un nuevo proyecto de poder.

Las universidades como territorios de memoria y resistencia

Para hablar del movimiento universitario de El Salvador durante el siglo XXI, es necesario tener en cuenta dos acontecimientos políticos que marcaron su historia: la masacre de estudiantes de la

* Adriana Ramírez es una joven salvadoreña, defensora del territorio, ingeniera en Gestión Ambiental y parte del Movimiento Político Rebelión Verde El Salvador (ReverdES), organización liderada por juventudes profesionales y estudiantes, criminalizada por el gobierno de Nayib Bukele debido a su trabajo en la defensa del territorio. Es ecofeminista y está organizada en el exilio en México. Su trabajo en El Salvador está relacionado con el acompañamiento a conflictos socioambientales, la investigación relacionada con el agua como territorio hidrosocial y la formación y el acompañamiento a grupos de mujeres campesinas, miembros de Juntas de Agua y trabajadoras de los cuidados desde los feminismos campesinos, populares y comunitarios de Abya Yala.

Universidad de El Salvador (UES) y la de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Ambas sucedieron en el marco de una década de tensiones que anticipaba la creciente conflictividad política y de represión estatal que se extendería a lo largo de la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992. En este contexto, diferentes movimientos gremiales, eclesiales, estudiantiles y populares se organizaban desde diferentes frentes.

El primero de estos acontecimientos, la masacre de los estudiantes, sucedió el 30 de julio de 1975. Luego de años de intervenciones y ocupaciones en la universidad por parte de gobiernos militares, como el del coronel Arturo Armando Molina, movimientos estudiantiles universitarios y de secundaria preparaban el desfile bufo para las fiestas julinas de ese año en el departamento de Santa Ana, en el occidente del país, donde se ubica el Centro Universitario de Occidente, una de las pocas sedes de la UES. Frente a esta acción, y con la excusa de frenar células marxistas, cuerpos de la seguridad de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional allanaron el Centro Universitario de Occidente, reprimiendo la protesta estudiantil organizada en contra del gasto de 1 millón de colones que utilizaba el gobierno para financiar el concurso de Miss Universo; según las organizaciones estudiantiles, al menos 12 personas murieron, 20 resultaron heridas y 40 fueron detenidas durante esta primera represión.

Como respuesta a esta violencia, el 30 de julio de 1975, desde el portón de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en San Salvador, partió una marcha al interior de la universidad que salió por el portón de la Facultad de Jurisprudencia. Según Pablo Salvador Cárcamo, sobreviviente de la masacre (Universidad de El Salvador, 2026), pocos kilómetros después de haber comenzado la marcha, en la 25 avenida norte, militares y policías vestidos de civiles lanzaron un ataque con balas directamente a las personas manifestantes, además de acorralarlas bajo un paso a desnivel con tanquetas y grupos antimotines. Al menos 50 personas fueron asesinadas o desaparecidas ese día (Gómez-Agudelo, 2023).

La masacre de los estudiantes de la UES fue una de tantas que buscaban apagar la chispa revolucionaria que comenzaba a organizarse en el país y que llevaría, posteriormente, a la conformación de un frente revolucionario capaz de cuestionar el orden político en El Salvador.

El segundo acontecimiento, la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, respondería al impulso nacional e internacional del pensamiento crítico y la denuncia contra la violencia y violación de los derechos humanos perpetradas por grupos militares salvadoreños. Esta denuncia fue liderada por los sacerdotes Ignacio Ellacuría (rector de la universidad), Ignacio Martín Baró (rector del Instituto Universitario de Opinión Pública), Segundo Montes (Instituto de Derechos Humanos en la universidad), Juan Ramón Moreno (pastor de una iglesia en las afueras de San Salvador), Amando López (director del programa Fe y Alegría), además de una colaboradora en los trabajos de cuidado y su hija, Elba y Celina Ramos. Esta masacre sucedió el 16 de noviembre de 1989, fecha en la que miembros de un batallón de élite de la milicia salvadoreña sacó de sus habitaciones a los sacerdotes, disparándoles en la cabeza.

Estos dos momentos ayudarán a entender cómo las discusiones y las acciones de los movimientos universitarios y las universidades han desafiado históricamente al poder mediante su capacidad para construir y difundir el pensamiento crítico, la organización y la acción política.

De las tanquetas a las promesas

Los movimientos estudiantiles del siglo XXI heredan una memoria de movilización y lucha en contra de las injusticias estructurales que no han cambiado mucho para “la gente de a pie”. Sin embargo, enfrentan, ciertamente, condiciones y dinámicas completamente diferentes a las del siglo XX. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que dieron un final administrativo a la guerra, surgieron otros fenómenos sociales que acompañaron el crecimiento de las generaciones *millennial* y *z*, a saber: el fenómeno de las maras y pandillas, el auge y democratización de la tecnología y las redes sociales, el desencanto con los partidos que ocuparon el poder luego de los acuerdos de paz, desde la Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA), identificada con la

derecha, el conservadurismo y el anticomunismo, hasta el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda socialista democrática y resultado de la coalición de movimientos que conformaban la guerrilla durante la guerra.

A lo largo de los 30 años de bipartidismo en El Salvador, protagonizados por ARENA y el FMLN (1992–2019), las políticas centradas en las juventudes y estudiantes tuvieron, en una simplificación bastante ajustada, dos principales enfoques: en el gobierno de derecha, una orientación a la empleabilidad y la securitización a partir del plan Mano Dura, así como el auge de universidades privadas derivada de la neoliberalización del Estado. Durante el gobierno de izquierda, estas políticas se caracterizaron por la institucionalidad y diversos programas insignia como “Jóvenes con todo”, así como el impulso de programas de asistencia social para juventudes en situación de vulnerabilidad o becas completas en la UES para estudiantes egresados de institutos nacionales.

Asimismo, los partidos políticos durante estos gobiernos crearon políticas públicas dirigidas hacia las juventudes, lo que no necesariamente implicaba ceder espacios de poder político a las nuevas generaciones. En ese sentido, la toma de decisiones seguía ocupada por personas que habían mantenido sus posiciones durante décadas, cambiando de puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías y secretarías de partidos políticos. Esta permanencia podía ser interpretada por las juventudes como una falta de confianza en las capacidades de liderazgos jóvenes y como un apego al poder que los partidos tradicionales no querían soltar. Es en medio de esta percepción, tanto de las juventudes, como de la sociedad en general, que aparece la figura de Nayib Bukele, un joven que, desde sus labores como alcalde del FMLN, había puesto en el mapa un municipio de la periferia: Nuevo Cuscatlán.

En 2015, aún bajo la bandera del FMLN, Bukele buscaba llegar a la alcaldía de San Salvador. Una de sus acciones centrales durante la campaña para alcanzar este fin fue realizar una serie de encuentros con estudiantes y comunidad educativa, estrategia que replicaría posteriormente, en 2018, para su candidatura presidencial.

El discurso realizado en 2015 en la UES resulta especialmente interesante al observar, en retrospectiva, el carácter autoritario y populista que luego tendría su gobierno. Durante este encuentro con estudiantes, Bukele reuniría a cientos de jóvenes que abarrotaron el auditorio y sus alrededores para verlo, tomarse una foto con él y escuchar su discurso. Fue recibido con la consigna “Esta es la U, esta es la U”, que hace referencia a la importancia histórica y legitimidad que tiene la UES. Bukele, además, se sumó a las consignas levantando su puño izquierdo y repitiendo: “Esta es la U, esta es la U”, con lo que se posicionaba no solo como afín a las juventudes, sino que asumía una consigna cargada de identidad y memoria política universitaria.

En este discurso hizo referencia a la masacre de estudiantes de 1975, asegurando que esto no se repetirá nunca más, y que ahora ya no pueden amenazarles con tanquetas. Lanzó, además, un comentario sarcástico en el que insinuó que el arma que tenían para atacar al gobierno de turno (ARENA) eran ejemplares de *El Diario de Hoy*, “que ya nadie lee”. Añadió también que él sería el primero en encabezar la marcha para exigir el aumento presupuestario de la UES y para acompañar las luchas universitarias. Junto a él se encontraban Gabriela Rodríguez, que luego sería su esposa, y, atrás, Mario Durán y Ernesto Castro (actual alcalde de San Salvador y presidente de la Asamblea Legislativa, respectivamente).

En este espacio, Bukele no solamente interpelaba a las juventudes, sino que incorporaba símbolos, lenguajes, referencias y memorias construidas por el movimiento universitario, elementos que dialogaban con la imagen de renovación generacional que se constituía alrededor de su figura: un político *millennial*, despreocupado, aficionado a Twitter y que usaba la gorra hacia atrás.

Juventudes y movimiento estudiantil: ¿sujeto político o capital político?

Luego de la segunda ronda de encuentros con las juventudes universitarias y de ganar la presidencia en 2019, llegó la pandemia del COVID-19, lo que le permitió al gobierno de Nuevas Ideas dar algunas pinceladas de securitización que posteriormente serían implementadas y replicadas en el Plan Cuscatlán (cuya información fue puesta bajo reserva por 7 años). Este consistía en centros de contención con la capacidad para albergar hasta 4000 personas simultáneamente, que provocaron contagios y eran operados bajo la vigilancia de la policía y el ejército. Las actividades presenciales en universidades fueron canceladas, al principio por dos semanas, luego dos más; después fueron meses y terminaron siendo años, aun con las medidas sanitarias levantadas para otro tipo de actividades. Mientras el promedio en América Latina de cierre de centros escolares de educación básica fue de 70 semanas, El Salvador los mantuvo cerrados por 88 semanas en total.

En la Universidad de El Salvador las clases no presenciales se extendieron hasta 2024, con un retorno muy gradual, y movimientos estudiantiles señalaron que ponían en peligro la calidad de la enseñanza y representaban una traba para la organización estudiantil.

A finales de 2022, el rector de la UES, M.Sc. Roger Arias, anunció, al lado de Yamil Bukele, una inversión de \$15 millones de dólares que no formaba parte de las promesas de campaña de Nayib. Esta inversión abarcó 415 mil metros cuadrados, incluyendo 22 edificios del campus universitario y otras infraestructuras.

La infraestructura construida, a pesar de ser presentada como herencia para futuros estudiantes, tenía la intención de crear un espacio de alojamiento para las personas participantes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, mientras las alumnas y alumnos aún no tenían acceso a los campus para continuar su formación. Más tarde ese mismo año, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UES autorizaría al gobierno el uso de la llamada “Villa Olímpica” para alojar a periodistas que cubrirían Miss Universo. Mientras la infraestructura de la universidad se fortalecía para ponerse en función de los intereses del gobierno, se debilitaba la universidad como espacio de organización política.

En ese momento, diversos colectivos de juventudes y movimientos estudiantiles denunciaron la ocupación de la UES, tanto para clases como de los espacios que son administrados por los movimientos estudiantiles. Aunque la UES ha atravesado una crisis de legitimidad y se ha evidenciado en muchas ocasiones su falta de autonomía, especialmente ante el gobierno de Nayib Bukele, existen actualmente sectores de pensamiento crítico y movimiento estudiantil que señalan estas irregularidades e injusticias.

El país de las maravillas que Bukele prometía para las juventudes tarda en llegar, y la priorización de la UES, la apertura de nuevas sedes como apuesta para aumentar el acceso a la educación no se ven cerca; en cambio, hemos recibido un país en el que el 9% de los hombres jóvenes de entre 24 y 29 años se encuentran en la cárcel.

La UES pidió en el ejercicio fiscal 2026 un total de \$375 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aprobó únicamente 116.4 millones de dólares, representando este un incremento de menos del 2% respecto al año anterior.

En ese sentido, tanto las juventudes, como la UES, han sido algunas de las promesas que Bukele ha dejado más evidentemente de lado. Todo el contexto expuesto en los párrafos anteriores nos permite abrir la pregunta de si Bukele buscó crear las condiciones para fortalecer a los movimientos estudiantiles y a las juveniles como capital político o si, en cambio, se ha ido evidenciando la capitalización política que realizó frente a las nuevas generaciones que buscaban alternativas dentro de la democracia para construir futuros mejores. Con esto no quiero restar agencia a los

movimientos, que siguen siendo sujetos políticos activos; sin embargo, abro la pregunta para analizarnos como tales y reflexionar sobre nuestro papel dentro de las crisis democráticas y de los sistemas partidarios, así como sobre la forma en que nuestra representación es disputada por los proyectos de poder.

¿Dónde está el movimiento estudiantil?

La promesa política de “no más tanquetas” frente a protestas estudiantiles se mantuvo como parte del discurso político de Bukele. Sin embargo, durante su gobierno se implementaron políticas de seguridad como el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 hasta la fecha, que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y criminalización de personas consideradas voces disidentes.

En pleno 2026, los movimientos estudiantiles no son tan visibles como en el siglo pasado; sin embargo, esto no significa que no existan o que no estén activos. Los contextos han cambiado y también las formas de organizarse, ahora mediante formas de activismo digital, enfocadas en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, en procesos locales y comunitarios y también en procesos de justicia feminista para hacer de las aulas y universidades lugares más seguros.

Debe reconocerse que la movilización en las calles y en espacios públicos, a pesar de continuar, ha disminuido considerablemente, en especial luego del periodo represivo de 2025, que hizo más evidente la persecución y criminalización de voces críticas y liderazgos juveniles, como en el caso de Alejandro Henríquez del Movimiento Político Rebelión Verde El Salvador, y de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal.*

El miedo impulsado bajo las políticas de securitización de Bukele ha permeado, sin duda, a los movimientos en El Salvador. La percepción del riesgo de ser una voz disidente ha aumentado y, con ello, la autocensura. El miedo no aparece de la nada: vivimos en una sociedad que tiene una historia de tanquetas, represión, desapariciones y masacres. Esto mismo ha desarrollado en nosotras formas particulares de interpretar el riesgo político (incluso físico y psicológico) al que nos enfrenta esta situación. La represión contemporánea no necesita reproducir exactamente las formas de violencia del pasado para producir efectos políticos.

Conclusiones

La revisión histórica del movimiento universitario salvadoreño permite observar que, las universidades, además de ser espacios de formación académica, han constituido territorios de memoria, producción de pensamiento crítico, organización colectiva y disputa política. Los símbolos, luchas y acontecimientos históricos vinculados a su desarrollo son elementos reconocidos, tanto dentro, como fuera del ámbito estudiantil y pueden ser utilizados para la construcción de proyectos de poder.

La apropiación de estos símbolos, memorias y promesas durante la trayectoria política de Bukele contrasta con el contexto cívico salvadoreño actual, en que las posibilidades de acción en la vida universitaria han disminuido y la percepción de riesgo para la libertad y la vida al asumir liderazgos políticos ha aumentado.

* Alejandro Henríquez fue procesado bajo los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, lo que terminó con una condena de tres años fuera de la cárcel, dictada en diciembre de 2025, mientras Ruth López sigue siendo procesada en un caso bajo reserva de información al 25 de agosto de 2026, fecha de entrega de este escrito.

El discurso de cercanía con las juventudes y los movimientos estudiantiles que impulsó a Bukele en diferentes espacios universitarios contrasta enormemente con las condiciones materiales y concretas de desarrollo de las juventudes salvadoreñas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad, principales sujetos de capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción.

El movimiento estudiantil no ha desaparecido; su organización, agenda y espacios de acción se han transformado frente contextos y luchas que surgen con más fuerza en la contemporaneidad. Este entendimiento permite dar una mirada a los movimientos estudiantiles más allá de las movilizaciones callejeras y de las formas de organización del siglo XX.

En ese sentido, este texto está atravesado por preguntas cuya respuesta debemos construir en colectivo, pues busca abrir una discusión sobre las disputas por la representación de las juventudes de cara a proyectos de poder que usan sus símbolos y lenguaje, pero terminan hablando en nombre de nosotras y promoviendo políticas que nos violentan. En este momento histórico salvadoreño, los movimientos estudiantiles y de jóvenes enfrentamos el desafío de volver sostenible nuestra capacidad de organización y acción.

En un país con una memoria histórica marcada por las tensiones y resistencias frente a poderes hegemónicos, disputar el presente también implica reapropiarnos de nuestros símbolos, lenguajes y formas de organización que nos permitan construir futuros distintos, en los que ningún estudiante ni ninguna persona joven sea asesinada por construir justicia.

Referencias

- Gomez-Agudelo, Jorge Wilson (2024). Masacre estudiantil de 1975 en El Salvador: memorias, silencios y activaciones políticas. *Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud*, 21(1), 1-27. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.21.1.5665>
- Universidad de El Salvador. (2026, 30 de julio). 30 de julio de 1975: Memoria, justicia y resistencia de una comunidad universitaria. <https://www.ues.edu.sv/30-de-julio-de-1975-memoria-justicia-y-resistencia-de-una-comunidad-universitaria/>

Un nuevo país nos espera: movilizaciones y organización estudiantil durante las protestas de Nicaragua en 2018

Fátima Villalta*

Mucho se ha escrito sobre la crisis de Nicaragua que comenzó en abril del 2018, pero irónicamente, muy poco se sabe fuera del país sobre las profundas transformaciones que significó un estallido que movilizó a cientos de miles de nicaragüenses, provenientes de distintos sectores sociales, para exigir la salida del dictador y su esposa. Lo que pasó durante esos meses configuró y continúa transformando, de forma irreversible, a una sociedad entera. A la calle salieron los grupos más variopintos: desde organizaciones feministas y de la diversidad sexual, seguidores de la iglesia católica, campesinos organizados en el movimiento contra la construcción del canal interoceánico, artistas, pensionados, hasta ciudadanos que no estaban vinculados con ningún movimiento social y quienes previamente contemplaban con escepticismo los alcances de la movilización ciudadana. Ellos fueron la mayoría y el sustantivo “autoconvocado” fue la palabra que ganó mayor fuerza mediática al momento de explicar quiénes eran esas personas que, entre cantos, bailes, máscaras y barricadas estaban dispuestos a enfrentarse a la desmedida violencia policial.

Entre la muchedumbre, los estudiantes universitarios se convirtieron en uno de los grupos protagónicos de las protestas. Fueron ellos quienes ocuparon los titulares nacionales e internacionales al ser vistos como los iniciadores de una rebelión. Así, se convirtieron en el sujeto simbólico que canalizó las ansias de transformación de las personas que habían salido a la calle para imaginar otro país.

En este breve ensayo cumplo un papel doble: como investigadora social y como la estudiante que formó parte de una de las distintas organizaciones universitarias que le plantó cara a la dictadura. Las demandas de ese entonces siguen vigentes hasta el día de hoy, y el espíritu organizativo, pese a la persecución política, sembró la semilla de un activismo político que continúa trabajando desde el exilio.

Organizarse con todo en contra

No es mi intención explicar una crisis de ocho años en un par de páginas, pero es importante aclarar que las protestas de 2018 iniciaron por una reforma a la Seguridad Social impulsada por el gobierno de Ortega. Esta propuesta nació por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aumentar la edad de jubilación junto a las semanas de cotización, aunado a la reducción de las pensiones de los jubilados. La propuesta, profundamente impopular, originó la protesta de un pequeño sector. El gobierno, acostumbrado a reprimir a los grupos opositores

* Licenciada en Psicología por la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua. Trabajó como especialista en documentación histórica en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). Máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, México. Candidata al Doctorado en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison.

usando fuerzas de choque, no imaginó que los videos donde golpeaban a adultos mayores causarían una enorme indignación popular. Aquella reforma fue la chispa que inició un estallido de enormes dimensiones.

Uno de los momentos claves de las protestas fue la toma de la Universidad Politécnica (UPOLI) durante varios meses. La toma demandaba aspectos tanto logísticos como políticos, debido a que este evento tuvo una enorme cobertura mediática y exigía la articulación de los primeros grupos estudiantiles que se presentaban ante cámaras para exponer sus demandas. En ese contexto nació el Movimiento Universitario 19 de Abril, una de las tantas organizaciones estudiantiles que se crearían en el calor de las protestas. Todo esto está muy bien documentado por José Luis Rocha en su libro sobre la participación de los universitarios en las protestas de abril (Rocha, 2019).

En este punto cabe hacer una aclaración importante: en Nicaragua, la única organización estudiantil permitida en las universidades públicas es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), una organización que surgió en 1981, a inicios de la Revolución Sandinista para convertirse en la aliada del sandinismo dentro de las universidades. Cuando el FSLN perdió las elecciones en 1990, la UNEN continuó siendo un importante vínculo dentro de los recintos, es por ello, que, con el regreso de Ortega en 2007, la unión ganó un protagonismo y fuerza renovadas. Afiliarse a la UNEN significaba militar en el Frente Sandinista de forma irremediable y, como premio por su lealtad, dirigentes estudiantiles destacados reciben cargos dentro del gobierno. Su trabajo dentro de los recintos también consiste en vigilar a los estudiantes disidentes y quienes intentaran organizarse de forma autónoma. Es por esta falta de representatividad independiente que el estallido de abril de 2018 fue el momento clave para que movimientos estudiantiles pudieran aglutinarse lejos del acecho perpetuo de la UNEN.

El 21 de abril de 2018, Ortega convocó a un diálogo nacional. La propuesta fue acogida por los diversos sectores, quienes reclamaron representación dentro de las mesas de negociaciones; dirigentes de la Iglesia Católica funcionarían como mediadores. El llamado al diálogo apresuró la incipiente organización autónoma debido a que los estudiantes movilizados en las calles no estábamos dispuestos a aceptar la representación de UNEN como un ente legítimo en la conversación. Fue entonces cuando estudiantes de distintas universidades, tanto públicas como privadas, comenzamos a realizar llamados, crear alianzas y convocar a asambleas clandestinas en medio de la violencia policial de la que éramos víctimas. En tiempo récord y de forma intensa, programamos sesiones de diálogo. Muchas duraban más de 12 horas; el objetivo era conseguir una agenda consensuada y elegir a quienes serían nuestros representantes dentro de la reunión convocada por Ortega, cuya primera sesión daría inicio el 16 de mayo.

En menos de un mes pusimos en práctica algo que para nosotros era completamente desconocido: la organización política. El FSLN había llegado al poder cuando éramos apenas unos niños y, desde su ascenso, hasta 2018, el régimen había restringido de forma sistemática las organizaciones autónomas. Esta misma situación la vivían los sindicatos en el país, muchos de ellos adaptados a una dinámica clientelar ajustada a los intereses del gobierno (Martí i Puig, 2017). En medio de las protestas, nos enfrentamos a los debates interminables, al disenso, a la importancia de la mediación y al respeto por la opinión de quien piensa diferente. No fue sencillo ni es mi intención romantizar aquellas extenuantes reuniones donde muchas veces parecía que no llegábamos a ninguna parte, pero la realidad es que, durante esos meses, nos convertimos de golpe en actores políticos y, por un momento, aunque breve, supimos cuán ardua y gratificante es la tarea de construir un destino propio.

A finales de abril anunciamos en una rueda de prensa la creación de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), una coalición con voceros de las más importantes universidades del país. Un par de semanas después, esa y otras organizaciones, representadas por una decena de estudiantes, hicieron historia: el 16 de mayo el dictador y su esposa se presentaron en el diálogo nacional. Ahí, los estudiantes pidieron la renuncia de Ortega y gritaron a viva voz los nombres de las personas asesinadas hasta la fecha. Los gritos de “¡Presente!” inundaron el

auditorio como una forma de honrar la memoria de las víctimas. Todo eso se transmitió en vivo en televisión nacional.

Nosotros, con los ojos llenos de lágrimas presenciábamos lo que sería un parteaguas en la vida de un país. Ortega y Rosario, en silencio, ambos con el rostro desencajado, se enfrentaban finalmente a la realidad: sin protocolo y lejos de sus simpatizantes, el repudio era enorme. “Lo que ocurrió en la Conferencia Episcopal fue histórico y sugiere que Nicaragua hoy es un país muy diferente al de antes de las protestas”, escribió el periodista Arturo Wallace (BBC, 2018) después de aquel primer día.

Ortega suspendió el diálogo en julio de 2018, mientras, en paralelo, recrudecía la violencia a través de la llamada “Operación Limpieza”, un operativo “que consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enfrentar a las personas manifestantes a través de grupos combinados de parapolicias armados y agentes de la Policía Nacional, haciendo uso generalizado de armamento letal militar” (Amnesty International, 2018, p.3). Desde mayo hasta julio, las organizaciones estudiantiles tuvieron que articularse y negociar sus demandas junto a los distintos sectores presentes en el diálogo. Sin duda, la relación más ríspida fue la que sostuvieron los movimientos sociales con la empresa privada, debido a la histórica alianza que este sector sostuvo con Ortega hasta el quiebre con algunos grupos en 2018.

La suspensión del diálogo y el asesinato sistemático de manifestantes provocaron el fin de la movilización social y dieron paso a un nuevo periodo de terror: los arrestos masivos. Cientos de estudiantes, activistas, periodistas y manifestantes fueron detenidos, prácticamente secuestrados, por elementos de la Policía Nacional y cuerpos paramilitares. Muchos de mis compañeros de organización estuvieron en la cárcel durante meses y fueron liberados bajo la Ley de Amnistía que aprobó el régimen el 8 de junio de 2019. De acuerdo con el medio nicaragüense Confidencial (2019), entre febrero y junio de 2019 fueron liberados 620 presos políticos arrestados por su participación en las protestas de 2018 y su oposición al gobierno. Pese a la liberación, muchos de los estudiantes no pudieron regresar a la universidad y sus registros fueron borrados como represalia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2018 y 2022 hubo más de 150 expulsiones arbitrarias de estudiantes en el país (Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, 2024).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contabilizaron 350 asesinatos únicamente entre el periodo de 18 de abril y el 1 de octubre de 2018 (Informe A/HRC/52/63, 2023). La violencia fue ejercida, en su gran mayoría, por la Policía Nacional y grupos armados paramilitares, que usaron a francotiradores para contener a los manifestantes.

Desde entonces, la dictadura de Ortega ha perpetrado toda clase de horrores: tortura, desaparición forzada, encarcelamiento masivo, retiro de la nacionalidad a opositores, juicios arbitrarios, confiscación de propiedades e incluso represión transnacional. Todo esto se encuentra documentado en los distintos informes realizados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), un organismo independiente creado por las Naciones Unidas en 2022.

Comentarios finales

Muchos de los que abandonamos el país y pertenecemos al movimiento estudiantil nos dedicamos a denunciar públicamente la situación de Nicaragua en espacios internacionales. De esta forma, comenzamos a establecer relaciones con grupos de solidaridad, con espacios académicos y la diáspora nicaragüense. Sin imaginarlo, además, somos parte de un éxodo masivo de más de 800,000 nicaragüenses. Pese a las enormes dificultades que plantea el exilio, la voluntad de articularse y participar políticamente continua presente. Un ejemplo de esto se refleja en el trabajo de Jesús Gómez Abarca, investigador mexicano, quien ha documentado el activismo transnacional de los nicaragüenses en España (Gómez-Abarca, 2026); también lo ha hecho Nicté Castañeda al hablar de la participación de los jóvenes desde redes sociales y la recomposición colectiva

desde el exilio (Castañeda Camey, 2026). Junto a ellos, otros académicos y académicas continúan documentando el ejercicio político de la diáspora nicaragüense que se mantiene activa en países como Costa Rica, México, España o Estados Unidos.

“Nicaragua hoy es un país muy diferente al de antes de las protestas” escribió el periodista Arturo Wallace en mayo de 2018. Esa afirmación, dicha hace ocho años, continúa siendo una verdad absoluta. El cruel estado de terror impuesto por la dictadura no es más que un desesperado intento para detener lo inevitable. La consciencia de los nicaragüenses se transformó para siempre, y ese es, sin duda, el legado más importante del estallido de abril de 2018.

Referencias

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://reliefweb.int/report/nicaragua/violaciones-y-abusos-de-los-derechos-humanos-la-educacion-la-libertad-academica-y-otros-derechos-fundamentales-contraeestudiantes-docentes-directivos-academicos-y-otro-personal-universitario-grupo-de-expertos-en-derechos-humanos-ahrc55crp6>
- Castañeda Camey, Nicté Soledad (2026). Las juventudes nicaragüenses en el exilio crean nuevas formas de resistencia: Narrativas, redes y activismo digital. The Conversation. <https://doi.org/10.64628/AAO.vg5kdpfcq>
- Confidencial. (2019, septiembre 6). Familiares de «presos políticos» pedirán firmas para exigir su liberación. Confidencial. <https://confidencial.digital/nacion/familiares-de-presos-politicos-pedir-an-firmas-para-exigir-su-liberacion/>
- Gómez-Abarca, Carlos de Jesús (2026). Del exilio a la diáspora política: Activismo transnacional nicaragüense en España. 96, 1-20. <https://doi.org/10.14201/alh.32557>
- Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. A/HRC/52/63 (A/HRC/52/63). (2023). ONU: Consejo de Derechos Humanos. <https://www.refworld.org/es/ref/inforpais/cdhonu/2023/134669>
- Martí i Puig, Salvador (2017). Movimientos sociales en Nicaragua (1979-2014): Un caso excepcional. En Movimientos sociales en América Latina: Perspectivas, tendencias y casos. CLACSO. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv253f5v7.23>
- Nicaragua: Así fue el duro comienzo del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega, estudiantes y líderes de oposición. (2018, mayo 16). BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44146285>
- Rocha, José Luis (2019). Autoconvocados y conectados: Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua. UCA Editores. <https://repositorio.ousj.org/handle/20.500.12032/79413>
- Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua. (2018). Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/9213/2018/es/>
- Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contraestudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario. Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (A/HRC/55/CRP.6). (2024).

Una memoria sobre una toma: el movimiento estudiantil en Costa Rica (2018–2019)

Marianela Vásquez Cornejo*

Ser y reconocerse como una persona joven en América Latina y por contexto, además, centroamericana, viene acompañado de una carga social y simbólica inherente al propio nacimiento. Atravesar, así sean las tareas más cotidianas, teniendo como escenario principal una región que ha sido protagonista de algunos de los acontecimientos más convulsos de la historia política global, es sin duda, una razón más que válida para pensar en la juventud como un caleidoscopio de su propia realidad.

Si tomamos esto en consideración para hablar específicamente de la juventud en la Costa Rica del siglo XXI, y en su defecto, del movimiento estudiantil, hay que tener presentes varios aspectos que más allá de crear una receta perfecta para estudiarles como un monolito, nos permita entenderles con los matices propios de un grupo que se nutre de las complejidades de su espacio y de su distintiva diversidad.

A esto hay que sumarle, por supuesto, la particularidad de la idiosincrasia costarricense, que, desde su fundación como república independiente, emprendió la creación de una idea de excepcionalidad regional que ha intentado apartarnos en muchas ocasiones del resto del istmo, pero que sigue siendo parte de un espacio de convergencia que ha formado a sus juventudes universitarias.

Vale la pena también mencionar que el movimiento estudiantil del nuevo milenio es heredero de una Costa Rica que atravesó su peor crisis económica no hacía mucho tiempo, en 1980, en la transición entre Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, y a esto habría que sumarle que Centroamérica, en medio de la Guerra Fría, sostenía en sus fronteras proyectos revolucionarios como la reciente Revolución Sandinista en Nicaragua, donde se sabe, existió participación de las juventudes de nuestro país, y la guerra civil en El Salvador.

Se cerraba también un siglo donde las y los estudiantes de secundaria habían participado, en 1919, de la quema del diario *La Información*, en protesta contra la dictadura de Federico Tinoco, donde la juventud universitaria se había organizado en las históricas jornadas contra ALCOA en 1970, y habían llevado a una huelga indefinida al ITCR a inicios de 1980, en plena recesión, para pelear por su democratización.

Con todo esto, se inauguraron las primeras décadas del siglo XXI, con el movimiento estudiantil en las calles contra el Combo del ICE y robusteciendo las filas del NO al TLC, que iban a ser parte de una reestructuración de la vida política que las juventudes de menos de una década después, estarían viviendo con el rompimiento del bipartidismo en el 2014 y que, con la elección de Carlos Alvarado Quesada cuatro años más tarde, en 2018, las confrontaría con el enrevesado clima

* Estudiante avanzada de la carrera de Historia de la Universidad de Costa Rica. Ha participado como asistente de investigación para el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), es ex integrante de los colectivos feministas Las Hijas de Zárate y Me pasó en la UCR. Fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de Historia, Estudios Sociales y Archivística (AEHESA) en el periodo 2019-2020 y formó parte activa del movimiento estudiantil del 2016 al 2020.

político del momento y culminaría, al menos en la Universidad de Costa Rica (UCR), con la toma de la Facultad de Ciencias Sociales en el 2019.

Los siguientes párrafos son entonces un ejercicio personal que expone mis recuerdos siendo parte de la juventud universitaria que se enfrentó al cataclismo social de esos años, y que se proyecta como un punto de encuentro para extender una discusión necesaria sobre la articulación del movimiento estudiantil.

Existe un intento de recuperar acontecimientos relativamente recientes que aún necesitan encontrar un espacio en la memoria colectiva, que permitan emprender proyectos desde un recuerdo que estimule la organización y la intervención política; además, para evocar que la juventud latinoamericana pertenece a una larga colección de movimientos de resistencia que luchan por la dignidad de sus pueblos.

A modo de contexto

Acá tenemos que remontarnos un par de días antes, al 14 de octubre del 2019, cuando se publicó la noticia sobre el redireccionamiento que planeaba el Ministerio de Hacienda sobre un total de ₡70 000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esto implicaba una variación respecto al uso que las Universidades Públicas realizaban sobre sus fondos y cómo se utilizaban a lo interno de las mismas, afectando el sistema de becas, la acción social e incluso la contratación de cuerpo docente.

Cabe destacar que esto sucedió poco después de cumplirse un año de que diversos sectores de la sociedad, incluyendo el movimiento estudiantil, se sumaran a los varios días de protesta en respuesta a las discusiones sobre el Plan Fiscal que posteriormente implementó el gobierno Alvarado Quesada, y que resultarían en la intervención de la Fuerza Pública en el Campus Rodrigo Facio, violentando no solamente a sus estudiantes, sino a la autonomía universitaria.*

Teniendo en mente los antecedentes, el miércoles 16 de octubre la Sede Regional del Pacífico de la UCR tomó la batuta, y sus estudiantes realizaron entonces el cierre de sus instalaciones como protesta por este redireccionamiento. Bastó solamente un día para que las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, el 17 de octubre, tomaran el edificio de su facultad por 14 días, uniéndose a los reclamos que incluían una fuerte crítica al manejo de los recursos a lo interno de la universidad y que afectaban profundamente a las sedes regionales.

Las protestas fueron extendidas hasta la Universidad Nacional (UNA), aunque luego de varios conflictos internos con la administración universitaria, se logró sacar a los y las estudiantes que en su mayoría habían ocupado el edificio de rectoría y que decidieron llevar hacia la vía pública sus reclamos, donde recibieron el abordaje violento de la Fuerza Pública.

¿Y ahora?

¿cómo convivimos fuera de la clase?

La toma de Ciencias Sociales fue un acontecimiento tan abrupto que necesariamente, con el paso de los días, la convivencia y las formas de transitar esta nueva normalidad fueron encontrando formas de ser gestionadas por la comunidad que la habitaba. La traducción de esta nueva cotidianidad se reveló en que, pronto, el edificio no era solamente un sitio donde recibir clases, era también donde se comía, se dormía, se bailaba y se discutía.

* Artículo 84 de la Constitución Política sobre la autonomía universitaria. <https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=3¶m4=4932¶m5=>



Fotografías de archivo personal*

También fue un espacio que permitió el acercamiento entre las y los estudiantes, que, muchas veces, estuvo detenido por la “normalidad” universitaria, que no necesariamente demandaba una relación más allá de la academia.

Adentro del edificio tomado de la Facultad de Ciencias Sociales, se había ya imaginado y ejecutado una estructura organizacional, con grupos encargados de seguridad, alimentación, comunicación e iniciativas culturales. Además, se tejieron redes de apoyo con otros edificios como la Facultad de Educación de la UCR, con quienes se mantenía constante diálogo y se enviaban víveres, pues Ciencias Sociales era el punto de llegada del apoyo de estudiantes y cuerpo docente, sumado a las comodidades materiales que brindaba el edificio.

Adicionalmente de que se movilizaba a estudiantes que acuerpaban las acciones que hicieron posible mantener en muchas ocasiones la protesta. Un acto similar se replicó en la UNA, con cuyo movimiento estudiantil también existía un acuerdo de cooperación que permitió no solo el respaldo, sino también la seguridad y el cuidado.

Se abrió además la oportunidad de articular esfuerzos que estuviesen encaminados a construir organismos autónomos dentro del movimiento estudiantil, como lo fue, por ejemplo, el Frente Autónomo Interuniversitario (FAI), que finalmente fue la agrupación que se mantuvo en la mesa de negociación con la decanatura y demás autoridades universitarias para la liberación del edificio.

Merece la pena mencionar que, aunque existieron representaciones estudiantiles que formaban parte de la institucionalidad (como las asociaciones de estudiantes, desde donde se ejerció un intento mediador con el decanato de la FCS), era esperable que, en momentos como estos, la confianza se depositara finalmente en el FAI por su naturaleza autónoma.



* Todas las fotografías que se muestran forman parte de un archivo personal recopilado en el transcurso de los 14 días de toma en la Facultad de Ciencias Sociales.



La toma también permitió la apropiación del edificio en su sentido más literal. Un gigante brutalista de concreto expuesto, que, por haberse construido con una figura de fideicomiso entre la UCR, un banco costarricense y el Banco Mundial, no podía ser alterado en ninguna circunstancia. Producto de la toma, el edificio terminó siendo una galería de expresiones políticas donde la denuncia, la esperanza y las voces de sus estudiantes podían encontrar la manera de salir al mundo. Fue así como los pasillos se convirtieron en un museo con residentes.

La oleada feminista del 2018

Fuera de nuestra frontera, América Latina también estaba luchando con sus propios proyectos antiderechos, y el movimiento feminista fue, sin duda, protagonista indiscutible de marchas masivas alrededor del continente. Pero los ojos del mundo y de Costa Rica, voltearon hacia los pañuelos verdes en Argentina.

Tras las multitudinarias movilizaciones en favor de la despenalización del aborto en el Cono Sur, no tardaron en establecerse paralelismos con el debate que se desarrollaba simultáneamente en Costa Rica en torno a la firma de la norma técnica sobre el aborto terapéutico.* El tema resultaba particularmente sensible no solo por su contenido, sino también por su relevancia política: la aprobación de la norma había sido una de las promesas de campaña del



* En 2019 el presidente Carlos Alvarado Quesada firmó el decreto N° 42113-S donde oficializaba la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal (Aborto terapéutico), mismo que fue derogado el 15 de octubre de 2025 en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, <https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion>



presidente Carlos Alvarado Quesada y se situaba en abierta contraposición con el discurso de los sectores conservadores evangélicos, encabezados por Fabricio Alvarado Muñoz, cantante de música cristiana y candidato presidencial que había disputado a Alvarado Quesada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Es así como, en su histórica convergencia, el movimiento feminista y el movimiento estudiantil identificaron que ambas luchas compartían una misma raíz, que era la disputa contra un gobierno de corte neoliberal que proponía la transgresión de los derechos más básicos, como la salud y la educación. Sumando a las manifestaciones y a las circunstancias que encendieron ese año, para 2019, diferentes colectivas feministas de las tres principales universidades públicas, cuyo nacimiento se dio como plataformas de denuncia anónima, (Me pasó en la UCR, Las Hijas de Zárate, Me pasó en la UNA y Me pasó en el TEC) declararon estado de emergencia debido a la violencia y el acoso sexual en las universidades, acontecimiento

que también ayudó a fortalecer la ya histórica relación de los grupos feministas con el movimiento estudiantil, y que definitivamente le dio características únicas a la toma de la facultad.

Este panorama se mezcló con la alta tasa de participación que se dio durante el período 2019-2020 dentro de las juntas directivas de las asociaciones de estudiantes en el área de Ciencias Sociales, que, según datos de la propia facultad, un 88% de las presidencias estaban ocupadas por mujeres, mismas que ejercerían su mandato durante el proceso de la toma.*

Como resultado de un periodo de confrontación constante y años de ser excluidas de la política universitaria, siendo expuestas constantemente a procesos de violencia, la toma del edificio fue una reivindicación del trabajo que en su mayoría era ejecutado por mujeres. Desde la organización, hacia lo interno del edificio y planificación de estrategias, las estudiantes fueron lideresas en los espacios de toma de decisión y voceras del movimiento, lo que también permitió introducir las demandas propias dentro de este universo de cooperación comunitaria.

Dicha lógica es una evidente ruptura con la tradición latinoamericana nacida de las revoluciones y heredada por el movimiento estudiantil de toda la región, de pensar los procesos de transformación política en masculino, así como las memorias de los acontecimientos que luego son insertadas dentro de lo colectivo como la retórica dominante.

Esto se vuelve crucial a la hora de pensar en la experiencia de la juventud y cómo se ha construido desde la mirada patriarcal, dejando de lado la mayoría del tiempo las vivencias de las mujeres que han participado activamente de los procesos de transformación social y política, y donde los hombres, protagonistas de la historia hegemónica, monopolizan la forma en la que se entiende la vida universitaria.

Elizabeth Jelin (2002) ha sido una de las autoras que ha trabajado sobre el concepto del género de las memorias. Ella asegura que la experiencia directa y la intuición indican que mujeres y

* Datos estadísticos publicados por la Facultad de Ciencias Sociales el 8 de marzo del 2020. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2968358173214787&id=330169830366981&rd=1

hombres desarrollan habilidades diferentes en lo que concierne a la memoria. En la medida en que la socialización de género implica prestar más atención a ciertos campos sociales y culturales que a otros, y definir las identidades ancladas en ciertas actividades más que en otras (trabajo o familia, por ejemplo), es de esperar un correlato en las prácticas del recuerdo y de la memoria narrativa.

Es por esta misma razón que la toma de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y su desarrollo merecen especial atención, al ser uno de los primeros procesos, al menos para el movimiento estudiantil del siglo XXI, donde las mujeres, en su mayoría, eran las representantes de un relato en progreso en el recuerdo de esa juventud.

A modo de conclusión

El fenómeno de la toma fue definitivamente un proceso que en muchos casos reavivó la organización del movimiento estudiantil y dio nacimiento a proyectos autónomos que se alineaban con el momento político del país y de la región latinoamericana, donde también las mujeres fueron, en gran parte, quienes gestionaron y representaron tanto a la parte institucional, vista desde las asociaciones de estudiantes, como el ala autónoma con las vocerías, colectivos feministas y el liderazgo del Frente Autónomo Interuniversitario.

A tan solo cinco meses de los acontecimientos, la pandemia del COVID-19 azotó el mundo y le obligó al aislamiento, disolviendo así la capacidad presencial de reunión, de protesta y de organización. Un golpe que, sin duda, también afectó a quienes se venían integrando de forma reciente a la vida universitaria y limitando la capacidad de acción del movimiento estudiantil.

Es una oportunidad valiosa plantear una agenda de investigación que se ocupe de entender cómo la emergencia sanitaria transformó las formas de vinculación de las nuevas generaciones con la universidad y su práctica política dentro de esta, que al mismo tiempo pueda proponer nuevos acercamientos para la integración y fortalecimiento del movimiento estudiantil.

Por otro lado, y contemplando el panorama actual, se convierte en una responsabilidad mantenerse firmes frente al resurgimiento de los autoritarismos en la región, velando con fervor por los derechos que se han alcanzado y que no deben darse nunca por un hecho.

Finalmente, esta experiencia no busca ser en lo absoluto totalizante ni esencialista, en su lugar, quisiera ser un punto de convergencia para que la juventud universitaria pueda plasmar y crear sus propios recuerdos, siendo fiel a una tradición donde la memoria es un lugar de resistencia y resignificación, sobre todo en un lugar del mundo donde esta nos ha ayudado a sobrevivir por décadas al asedio del imperialismo.



¡Que nada ni nadie sea impedimento para hacer eterna la lucha del movimiento estudiantil!

Referencia

Jelin, Elizabeth. (2022). *Los trabajos de la memoria*. Fondo de Cultura Económica Argentina.

Militancia, aula, calle: reflexiones sobre la militancia universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 2016–2019

Daniela Lizbeeth Núñez Oyuela*

Los movimientos estudiantiles en América Latina se han caracterizado por una capacidad de movilización y acuerpamiento de otros sectores de la sociedad. La movilización estudiantil es un espacio de adquirir conciencia política, convertirse en un sujeto político porque permite comprender la realidad con otras herramientas, de los cuadros que participan en el movimiento estudiantil por lo general terminal formando parte de la vida política de cada respectivo país. Debido a la experiencia que se adquiere en la negociación con otros actores, capacidad de liderazgo, acceso a capital social, pensamiento estratégico y la construcción de una intelectualidad a partir del conocimiento de campo.

Dentro de este ensayo se relatan memorias personales y opiniones al atravesar el momento histórico del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU, 2016-2018), en el cual moldeó una parte de mi construcción como sujeta política dentro de un espacio concebido dentro de la realidad hondureña como “apolítico”. El ensayo es una vivencia subjetiva dentro de la militancia estudiantil; la prioridad no es exponer los liderazgos o los logros del MEU, sino las reflexiones propias y el enriquecimiento social, político, intelectual, histórico que deja marcado vivir esta experiencia dentro del proceso de formación académica.

Inicio a la etapa universitaria

Una de las transformaciones importantes que estaba atravesando la Universidad cuando ingresé a estudiar en el año 2015, era el rechazo a la cuarta reforma universitaria impulsada por la intervención del Congreso Nacional de Honduras a partir del 2004. Esta reforma universitaria, concordaba con el modelo neoliberal vigente desde la década de los noventa, buscaba consolidar una universidad que respondiera a las demandas de la educación bancaria mediante la aplicación de las Normas Académicas.

* Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y apasionada por la investigación histórica. Ha participado en Congresos de Historia, en la Escuela de Posgrado de la SOL-CHA y fue reconocida por la Dirección de Vinculación Universidad Sociedad de la UNAH en Producción Científica por el ensayo “Irma Leticia de Oyuela: Difusión cultural y pensamiento científico para consolidar el Departamento de Extensión Universitaria 1967-1969”. Actualmente es maestrante en Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional de Quilmes.

Esta normativa exigía parámetros de calidad y excelencia cuando la misma universidad no respondía con las mejores condiciones para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, investigación, vinculación, entre otros. La movilización se daba mediante asambleas informativas que convocaban asociaciones estudiantiles de carrera, movimientos independientes, Frentes Estudiantiles Universitarios y estudiantes independientes. Los Frentes Universitarios son las organizaciones más antiguas de la universidad. Fundadas en los años sesenta y setentas, estos aglutinaban a estudiantes de diversas carreras y estuvieron presentes en diversas movilizaciones sociales a lo largo de la historia del siglo pasado, pero fueron perdiendo cierto protagonismo debido a su cooptación por los partidos políticos (Partido Liberal y Partido Nacional).

Dentro de esa coyuntura e historia del movimiento estudiantil, empecé a familiarizarme por esas actividades democráticas que buscaban informar y que los estudiantes obtuvieran más conciencia de la problemática que se atravesaba. Algunas carreras eran las que más agitación tenían y pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y varias ingenierías de la Facultad de Ingeniería.

Yo ingresé desde mi primer periodo académico a la carrera de Historia, profesión que no es bien vista ni ante la sociedad y muchos menos ante la familia, debido a que no ofrecía un estatus significativo en términos profesionales, sociales y económicos dentro de la sociedad hondureña; aún con la incertidumbre de mi futuro, aposté por mi fascinación por el pasado, los libros, la arquitectura, los hechos ocurridos, algunos personajes de la historia hondureña. Esa motivación fue la que me hizo a ingresar a la carrera, sin darme cuenta de que iba a descubrir mucho más de lo que había imaginado.

Dentro del contexto que se gestaban las luchas estudiantiles en la universidad, empecé a relacionarme con otras personas que venían de diferentes contextos al mío e historias familiares muy particulares; algunos de mis compañeros de carrera venían de familias que habían participado activamente en los movimientos sociales de las décadas de los setenta, ochentas donde existió una fuerte represión a los luchadores sociales. Conocer estos relatos me abrió la mente a otras realidades que concordaban con la misma temporalidad de los relatos de la vida de mis padres y otros familiares. Estar al tanto de nuevas versiones de la sociedad pasada hondureña me abrió la mente a cómo, los procesos histórico-sociales, van más allá de los relatos oficiales del Estado que tenía interiorizada por la enseñanza de esta en los diferentes niveles educativos.

Muchos de los participantes en este movimiento estudiantil tenían esta misma historia familiar, por lo tanto, era lo lógico y común que siguieran ese mismo camino de la organización y participación en movimientos sociales. Para mí era un mundo nuevo, porque mi historia familiar estaba alejada de cualquier militancia, proveniente de una familia trabajadora común que no mantiene presente una conciencia de clase, el espacio universitario se convirtió en mi biblioteca de Alejandría.

Transcurso de la formación académica-profesional

En el transcurso de las materias, paralelamente estaba la participación activa en la Asociación de Estudiantes de Historia. Esta misma tenía una fuerte presencia en el MEU. A pesar de ser una carrera pequeña, el conocimiento histórico te da muchas herramientas para comprender mejor los contextos sociales y las realidades fuera de la propia.

En ese tiempo comprendí otra forma de hacer política, alejada de lo partidario y lo electoral. En el transcurso de las clases, algunos profesores dentro de la carrera tenían posturas que más apoyaban a la militancia estudiantil y otros no, pero los que apoyaban, siempre nos exigían un mejor rendimiento, ya que consideraban que, al ser líderes estudiantiles, teníamos que dar el ejemplo de muchas maneras, incluyendo la excelencia académica.

El pensum académico de la carrera de Historia está desactualizado y hay ciertas corrientes historiográficas, corrientes teóricas-filosóficas que no se estudian en las aulas, porque los docentes las desconocen. Recuerdo muy bien que, dentro de la militancia estudiantil, conocí la teoría decolonial desarrollada por Enrique Dussel y otros de sus exponentes como Ramon Grosfoguel, Walter Mignolo, entre otros. Empezar a escuchar las explicaciones e indagar más allá, fue como descubrir un nuevo elemento en la tabla periódica, fue la pieza al rompecabezas que faltaba.

Pude comprender esa limitación que nos enseñaban de historia universal dentro de la universidad, que solo abarcaba los procesos de Europa, mientras que las lecturas del resto del mundo no eran prioridad. Puede que esto sea algo dado por sentado en Licenciaturas en Historia de otros países, pero dentro de la que yo pertenecía, para ese momento en especial, era muy difícil acceder a ello y fue dentro de la organización estudiantil que tuve acceso a nuevas teorías, debates y representantes que alimentaron mi formación académica.

Llegada del feminismo y nuevas discusiones en torno a las opresiones

Cuando surgieron las tomas estudiantiles, siempre había mujeres participando en ellas. Yo pocas veces me logré quedar a dormir dentro de la universidad, pero siempre apoyaba de otras maneras desde afuera. Es decir, mis responsabilidades estaban enfocadas en otros aspectos fuera de la mera toma de las instalaciones. Algo que caracterizó al MEU en aquellos años fue la articulación con otras organizaciones y movimientos sociales. Aquí mencionaré el contacto con organizaciones feministas. Gracias a las conversaciones de otras compañeras, nos llegó la invitación a participar en una Escuela de Formación Feminista impartida por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).^{*} Muchas compañeras del movimiento nos inscribimos a esa Escuela y dentro de ese espacio se armaban varios debates teóricos respecto a lo social y político vinculado al feminismo, debido a nuestra experiencia personal que se atravesaba en el movimiento estudiantil.

Ese momento fue propicio para tener contacto con el feminismo en Honduras, conocer esa parte histórica de su desarrollo y conocer a profundidad teórica todas las corrientes existentes del feminismo. Otro punto que sería el más complejo es que el feminismo te da herramientas que te hacen reconocer la violencia de forma estructural que vivimos las mujeres. Aún dentro de nuestros espacios de lucha con nuestros compañeros no estábamos exceptas de vivirla. La militancia en las mujeres lleva hasta triple carga de trabajo. Muchas de estas reflexiones que teníamos en colectivo con las compañeras, se trasladaban de forma práctica a los espacios de asambleas estudiantiles, colocando en el debate un mayor reconocimiento, visibilidad de las mujeres en esta lucha estudiantil. Siempre la palabra feminismo genera anticuerpos en cualquier espacio, pero es necesario para transitar a una transformación social.

Tiempos de represión, narco dictadura y movimientos sociales

El movimiento estudiantil universitario también sufrió intentos de desmovilización. Muchos estudiantes fueron criminalizados y expulsados de la universidad; algunos tuvieron episodios de violencia ocasionados por los entes represores del Estado. La universidad, específicamente la UNAH ejercía violencia y persecución, así como el Estado de Honduras lo hacía con la población hondureña.

^{*} Organización feminista: fundada en los años noventa, su objetivo es la promoción de los derechos de las mujeres, prevención de la violencia, la participación política, participación más justa en lo laboral esto a través de programas internos que brindan formación política y acompañamiento.

A nivel social, el país atravesaba una penetración del narcotráfico en sus instituciones, por lo tanto, la corrupción era desmesurada y se hicieron públicos los casos de corrupción. La población hondureña, como reacción, empezó a movilizarse en el así llamado “movimiento de las antorchas”: se salía a la calle los viernes por la tarde con una antorcha exigiendo la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y los estudiantes universitarios no estuvieron indiferentes. Siempre estuvieron presentes. Para mí, que nunca había participado en alguna actividad de protesta, también fue algo novedoso y todo siempre desde mi posición como actor estudiantil.

Algo que noté es que la población hondureña no parece estar acostumbrada a la protesta. La alineación con las dinámicas cotidianas es tal que, por ejemplo, las movilizaciones de las antorchas se realizaban los viernes por la tarde, algo que interpreté como una manera de protestar una vez terminadas las actividades productivas. Es común escuchar a la gente decir: “Ojalá nuestro país estuviera mejor”; sin embargo, los cambios no ocurren únicamente por voluntad política. Muchas veces son el resultado de una fuerte movilización social provocada por las contradicciones sociales, económicas y políticas existentes. Alcanzar condiciones de vida más dignas implica, en muchos casos, incomodarse, cuestionar el orden establecido y movilizarse para conseguir los cambios que se anhelan.

Para el año 2017, se da el fraude electoral en Honduras. Una vez presidente, Juan Orlando Hernández se consolidó en el poder y violó la constitución, que prohíbe la reelección presidencial. En contra de la ley, Hernández se lanzó como candidato y se cooptaron algunas instituciones para avalar el fraude electoral. La movilización popular estuvo muy reprimida y el fraude no se pudo revertir, terminando por consolidarse una especie de narcodictadura, marcada por años siguientes muy represivos en los territorios y en contra del movimiento estudiantil, que estrechó lazos con movimientos territoriales, generando compañía mutua en las luchas.

Vivir en represión te marca. Te marca más cuando militas que cuando no lo haces. Recuerdo que muchas personas apoyaban al partido político de turno, el Partido Nacional al que pertenecía Juan Orlando Hernández y no comprendían la magnitud del problema. En Honduras, los cuadros de los partidos nacionales se dan por votos de tradición familiares y prevalece el clientelismo, la corrupción, las redes de poder normalizadas e incuestionables. Un cuestionamiento podría costar la vida misma.

Parte de los análisis coyunturales que se tenían dentro del movimiento estudiantil, era comprender el momento histórico que atravesábamos en el país. Por mucho que las demandas estudiantiles corresponden a un espacio territorial reducido, no podíamos obviar el contexto nacional, porque nos determinaba. Considero que para nuestro desarrollo personal y lo que aspiramos a convertirnos, debíamos tener las herramientas para comprender el estado de nuestra sociedad y el movimiento estudiantil nos las brindaba. Se podía ver la realidad con otros ojos y estimo que, inclusive de manera más dura, pero más liberadora.

El objetivo principal del MEU era asegurar la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario. La creación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) fue una conquista que se logró pocos años después de poder graduarme. No analizaré su funcionalidad, pero sí vale la pena reivindicar ese derecho adquirido en un contexto nacional determinado por la represión, persecución y mucho debate.

Mi transición por la universidad y el movimiento estudiantil me hicieron llegar a ciertas conclusiones en torno a lo que significa para los hondureños la universidad y ser estudiante universitario, por lo que considero importante nombrarlo brevemente en los próximos tres apartados sobre la identidad universitaria, la movilidad social y la conciencia de clase:

a) Identidad universitaria:

¿qué es ser estudiante universitario?

Cuando ingresé a la universidad tenía la visión de cumplir con los requisitos, para convenir a la vida de consumo del modelo neoliberal. Matricular y aprobar las materias lo más pronto posible, para poder acceder a empleos más dignos o mejor remunerados. Cada realidad estudiantil es diferente; aún en la universidad pública, unos ingresan con más privilegios que otros. Muchos tienen que trabajar y estudiar, otras son madres solteras, algunos ya tienen su propio negocio familiar y existen otras responsabilidades más allá de estudiar. Esta diversidad de problemas individuales corresponde a problemáticas estructurales que se tienen que resolver en el espacio público, pero falta la conciencia para comprenderlo.

Otro punto que forma parte de la identidad estudiantil es el disfrute, el socializar y construir lazos de amistad que implican salir de fiestas, viajar, organizarse para estudiar, presentar trabajos, las vinculaciones sexoafectivas, entre otros. Esta visión del disfrute está muy presente en el imaginario estudiantil y de quienes están alejados de este. Lo que se espera del ser estudiante universitario, es que se aleje de espacios que, aparentemente no sirven y que, el estudiante universitario se quede dentro de una burbuja. Algunos padres de familia consideran que se debe fomentar la individualización y solo pensar en el futuro propio.

La construcción de la identidad estudiantil universitaria está estrechamente relacionada con el espacio de la Universidad y con la realidad social hondureña en la que esta se encuentra inserta. Sin embargo, persiste la idea de que la academia debe mantenerse alejada de los asuntos políticos, como si la política pudiera “contaminar” el pensamiento científico y la formación de profesionales que, en el futuro, supuestamente “resolverán los problemas de la sociedad hondureña”. Esta concepción resulta limitada, pues la Universidad no está separada de las problemáticas sociales, económicas y políticas del país. En este contexto, la identidad del estudiante universitario parece construirse cada vez menos alrededor de una responsabilidad colectiva frente a la sociedad y más en función de aspiraciones individuales, particularmente de la búsqueda de movilidad social y de clase.

b) La universidad como espacio de movilidad social

La historia de la UNAH forma parte en la consolidación del Estado de Honduras y es un reflejo de cómo se encuentra el tejido social hondureño. Esto significa que se puede concebir la universidad como un espacio donde convergen diversidad de actores, que reflejan las diferentes realidades de la población. En ese escenario, observamos cómo se plasman las problemáticas que atraviesan los estudiantes dentro de la universidad, pero estos mismos los visualizan como problemáticas de carácter individual y no de manera estructural.

Muchas de las expectativas que se generan en las familias cuando sus miembros más jóvenes asisten a la universidad, llevan a considerar a esta persona como el mecanismo para la movilidad social; ese es el objetivo primordial. Muchas veces tan siquiera se piensa la universidad como espacio para la construcción del conocimiento y esa parte científica, que es una característica de las universidades, no suele ser muy reconocida por la misma población hondureña. Eso lo vemos reflejado cuando en los planes de estudio, en el momento de cursar la clase de metodología de investigación, resulta la clase menos apreciada por la población estudiantil. Asignaturas como estas, sin embargo, son altamente importantes, porque ahí se forman las competencias de los futuros profesionales en el área de investigación.

c) La conciencia de clases y la forma de entender el mundo

Otro de los aprendizajes que adquirí de participar en el MEU fue adquirir esa conciencia de clases, que es muy carente en la mayoría de la población hondureña. Al participar en una lucha social, comprendí de mejor manera las dinámicas políticas, sociales e históricas del país. Ese punto de

vista es muy valioso, porque al salir de la Universidad nos enfrentamos a otra capa de la realidad, en las que se desenvuelven los problemas de la vida adulta.

La riqueza de experiencias que se adquieren en la universidad, tales como entender que somos seres políticos y que nuestra identidad, ideas y acciones forman parte de una postura política, son importantes, pero no se puede desmeritar el conocimiento académico. La militancia ofrece otras herramientas para el ejercicio profesional. Mi propia experiencia me brinda otros análisis y materiales teóricos para desenvolverme en ese campo, sumado a evitar las aspiraciones de clase. Con esto no significa que no deseo una vida digna, pero al tener la conciencia de clase y una profesión en el campo de la Historia, comprendo la estructura y superestructura de la sociedad. También con un título universitario, sigo siendo de la clase trabajadora y mis estudios me permiten no rechazar la clase social a la que pertenezco.

Reflexiones finales

Lo que el movimiento estudiantil universitario dejó en mí, no fue el gran protagonismo o la carrera política que muchos lograron obtener. Puede que ni siquiera sea recordada o mi participación no sea la más relevante. Pero esa capacidad de aprender a cuestionarlo todo, de no llevar una vida superficial, de empatizar por las luchas y cuestionar las desigualdades estructurales, me hace no vivir atada a muchas presiones sociales impuestas por este capitalismo salvaje en que vivimos.

Aprender a reconocernos como sujetos sociales, capaces de desarrollarnos en colectividad y de pensar en el bien común, no siempre es algo que se enseña en las aulas, en las familias o en la sociedad en general. Sin embargo, me quedo con la convicción de que estudiar en una universidad pública también implica asumir una responsabilidad con el pueblo hondureño. No se trata de vivir bajo una deuda permanente de agradecimiento, sino de comprender que el conocimiento adquirido puede y debe ponerse al servicio de la sociedad. La formación universitaria cobra un sentido más profundo cuando nos permite convertirnos en sujetos críticos, comprometidos y capaces de contribuir a las transformaciones sociales que Honduras necesita.